



COMUNICACIÓN
PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL

Señor(es):

Demandado(a)s

MUNICIPIO DE EL RETIRO, ANTIOQUIA

juridica@elretiro.gov.co

Dependencia Responsable

JUZGADO NOVENO
ADMINISTRATIVO ORAL DE
MEDELLÍN

Juzgado de Origen	Medio de Control	Fecha auto		
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN	NULIDAD	Día 19	Mes 03	Año 2024

Demandante(s)	Demandado(s)	Radicación
GUILLERMO RESTREPO MAYA CC. 1.017.133.290	MUNICIPIO DE EL RETIRO, ANTIOQUIA N.I.T: 890.983.674-0	050013333009-2024- 00064-00

Le comunico la existencia del proceso relacionado anteriormente y le pongo en conocimiento documento electrónico que contiene demanda, anexos y auto admisorio.



Así mismo, se le indica que deberá comparecer personalmente al despacho en la nomenclatura Carrera 42 No. 48 – 55 Medellín, Antioquia, o a través del correo electrónico: adm09med@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Anexos.

1. Documento Electrónico – Auto Admisorio.pdf – 02 folios
2. Documento Electrónico – DEMANDA NULIDAD Decreto 0044 Medellin y Anexos.pdf – 26 folios.

Cordialmente,

Guillermo R
GUILLERMO RESTREPO MAYA

Apoderado Parte Demandante

Tarjeta Profesional 226.135 del Consejo Superior de la Judicatura

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN
Diecinueve (19) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

RADICADO:	05001 33 33 009 2024 00064 00
ACCIÓN:	NULIDAD
DEMANDANTE:	GUILLERMO RESTREPO MAYA
DEMANDADOS:	DISTRITO DE MEDELLIN
ASUNTO:	ADMITE DEMANDA

Por reunir los requisitos legales establecidos en los artículos 161 y siguientes del CPACA - Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 34 de la Ley 2080 de 2021 y la Ley 2213 de 2022, **SE ADMITE** la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 CPACA – Ley 1437 de 2011, presentó GUILLERMO RESTREPO MAYA en contra del DISTRITO DE MEDELLIN.

Notifíquese personalmente a la entidad demandada, al Ministerio Público, Procurador 108 Judicial I, quien es la asignada a este despacho, (epino@procuraduria.gov.co), y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, esto es, mediante mensaje, debe precisarse que en todo caso la Secretaría del Despacho al momento de realizar la notificación deberá privilegiar la notificación al buzón establecido por la entidad pública demandada o particular inscrito en el registro mercantil para notificaciones judiciales, esto de cara al artículo 197 y 199 del CPACA, este último modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

De conformidad con el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, la notificación personal se entenderá surtida una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación, es decir, al tercer día hábil siguiente a la notificación.

En esta medida, una vez efectuada la última notificación, en el tercer día hábil se correrá traslado de la demanda y su corrección, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011, a la parte demandada, al Ministerio Público¹, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Con la respuesta de la demanda, la entidad accionada deberá aportar todas las pruebas que pretenda hacer valer y que se encuentren en su poder, de conformidad con el artículo 175, numerales 4 y 5 del CPACA. Igualmente, con la contestación de la demanda, la entidad pública demandada, deberá allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentra en su poder, requisito exigido en el parágrafo 1º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, y cuya omisión constituye **falta disciplinaria gravísima**.

Asimismo, las personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o privada accionadas deberán allegar junto con la contestación de la demanda, la prueba que acredite que remitieron copia de la contestación presentada a la parte demandante en formato digital a la dirección electrónica de notificación señalada en la demanda, so pena de dar aplicación a las sanciones que resulten procedentes.

En consonancia con lo anterior, se les recuerda a las partes que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021 mediante el cual se modifica el artículo 186 de la Ley 1437 de 2021, les asiste el deber a las partes de enviar a su contraparte y demás sujetos procesales un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso, de lo cual deberán allegar constancia a esta unidad

judicial, remitiendo vía correo electrónico el respectivo memorial informando el cumplimiento de ese deber, so pena de dar aplicación a las sanciones de Ley que sean procedentes.

En este punto, debe anotarse que respecto las entidades públicas y personas jurídicas privadas inscritas en el registro mercantil, la anterior obligación se entenderá satisfecha con la remisión al correo de notificaciones judiciales de la entidad accionada; sin embargo, los apoderados de estas entidades con la contestación de la demanda podrán indicar el correo personal en el que las partes remitirán un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso. A ese mismo correo la Secretaría del Despacho de estimarlo necesario podrá remitir a los apoderados las actuaciones que estime pertinentes, pero la remisión aquí descrita no se suple, ni se complementa con la notificación o remisión obligatoria que deba hacerse al correo de las personas jurídicas públicas o privadas descritas en este párrafo.

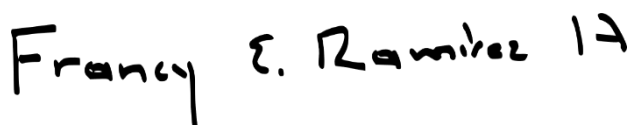
El Despacho en aras de salvaguardar los derechos de las partes y sus representantes, para todos los efectos privilegiará los correos electrónicos informados por los apoderados.

No obstante, se requiere a los abogados para que prevalentemente el correo informado coincida con el correo debidamente registrado en el Registro Nacional de Abogados. Así las cosas, deberán actualizar su información en el mismo e informar al Despacho cualquier modificación en relación con los correos electrónicos que hayan sido informados en este proceso.

ADVIÉRTASE desde este momento a las partes demandante y demandada que el Despacho dará estricta aplicación a lo previsto en el artículo 173 del Código General del Proceso, de conformidad con el cual “...*El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente*”, por lo que para acceder a cualquier solicitud de prueba documental que formulen las partes, se deberá acreditar el cumplimiento de dicha carga antes de la audiencia inicial, so pena de rechazo.

Se reconoce personería para actuar en causa propia al abogado GUILLERMO RESTREPO MAYA, C.C. No. 1.017.133.290 y TP 226.135 del C.S. de la J. (gr@lexetlit.com- 320 514 66 27)¹.

NOTIFÍQUESE



FRANCY ELENA RAMÍREZ HENAO
JUEZ

(Firma escaneada Art. 11 D.L. 491 de 18 de marzo de 2020)

EL PRESENTE AUTO ES NOTIFICADO EN ESTADO Nro. 13 DE HOY 20 DE MARZO DE 2024. (WILSON DE JESÚS ÁLVAREZ CASARRUBIA – SECRETARIO)

De acuerdo con la Circular PCSJC24-1 del Consejo superior de la Judicatura, se informa que cualquier solicitud dirigida al proceso deberá remitirse únicamente a través de la ventanilla virtual dispuesto en el aplicativo SAMAI en el siguiente link <https://ventanillavirtualsamai.azurewebsites.net/> y deberá enviarse copia a los demás sujetos procesales (art. 3 de la Ley 2213 de 2022

JJE

¹ Constancia: se verificó que no presenta sanción disciplinaria que le impida actuar, conforme a la Circular PCSJC19-18 del 9 de julio de 2019

Doctor(es)
MAGISTRADOS (REPARTO)
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Rama Judicial del Poder Público
Medellín, Antioquia

Proceso: **CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD**

Demandante: **GUILLERMO RESTREPO MAYA**

Identificación: **C.C 1.017.133.290**

Demandado: **DISTRIO DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA**

Identificación: **NIT 890.905.211-1**

Asunto: **DEMANDA**

GUILLERMO RESTREPO MAYA, mayor y vecino de la ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía N°1.017.133.290 de Medellín, abogado litigante y en ejercicio portador de la T.P. N.º 226.135 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando nombre propio, respetuosamente acudo a su despacho para radicar **DEMANDA de PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO** de medio de control de **NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD**, en contra de la entidad pública de orden territorial municipal, **DISTRITO DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA**, representado legalmente por su alcalde **FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA** o por quien haga sus veces, para que se declare la nulidad por inconstitucionalidad del numeral 4.2 del Lit. A del Art. 4 del Decreto 0044 del 17 de enero de 2024 expedido por el alcalde municipal de Medellín el Doctor **FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA**.

Pretensiones.

De acuerdo con el fundamento fáctico y el ordenamiento jurídico vigente, respetuosamente le solicito al operador judicial se sirva:

1. Declarar la **NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD** del numeral 4.2 del Lit. A del Art. 4 del Decreto 0044 del 17 de enero de 2024 expedido por el alcalde distrital de Medellín el Doctor **FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA**.

Hechos.

1. El demandante es ciudadano colombiano, mayor de edad y vecino del municipio de Medellín, Antioquia.
2. En desarrollo de actividades de control legal y constitucional de los actos administrativos que dan origen a la normatividad municipal del municipio de El Retiro, Antioquia, el accionante identificó el numeral 4.2 del Lit. A del Art. 4 del Decreto 0044 del 17 de enero de 2024 expedido por el alcalde distrital de Medellín el Doctor **FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA** que viola por vía directa la Constitución Política de Colombia y los derechos constitucionales reconocidos por vía de jurisprudencia constitucional.

Normas Demandadas.

A continuación, se cita las normas acusadas de inconstitucionalidad, subrayando el aparte que se acusa.

Decreto 0044 del 17 de enero de 2024.

Artículo 4. Zonas y Perímetros de Restricción. Se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal, en las zonas y perímetros que se señalan a continuación de:

+57 320-514-6627



LEXETLIT.COM
CONTACTO@LEXETLIT.COM



CARRERA 32 # 7B SUR - 52
OFICINA 113
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

4.1 Instituciones o establecimientos educativos, tanto públicos como privados-

4.2 Parques y plazas públicas.

4.3 Centros deportivos y recreativos.

4.4 En aquellos lugares del espacio público que se encuentran por fuera de las restricciones anteriores, donde se realicen eventos públicos o privados y concurran niños, niñas y adolescentes, mientras dure el evento.

Cargos.

1. Violación directa del Art. 16 de la Constitución Nacional.), normas internacionales [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19); Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 13)].

El cargo principal de la demanda consiste en que hay una vulneración de los derechos constitucionales previstos en la Constitución Nacional en el artículo 16, que establece el libre desarrollo de la personalidad. Derecho también reconocido y afirmado en tratados internacionales suscritos por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad. El numeral 4.2 del Lit. A del Art. 4 del Decreto 0044 del 17 de enero de 2024 contraría el alcance y contenido del artículo 16 de la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19); Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 13).

Fundamentos de derecho.

Procesal.

Artículos 135, 155, 156, 159, 161, 162, 164, 166, 180, 181, y 182 de Ley 1437 de 2011.

Sustancial.

Art. 16 de la Constitución Nacional.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19); Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 13).

Concepto de violación.

En cuanto al concepto de la violación, la jurisprudencia constitucional ha indicado de forma reiterada y pacífica que los cargos deben cumplir con tres parámetros básicos: *“el señalamiento de las normas constitucionales que consideren infringidas (art. 2, num.2, Decreto 2067 de 1991); (2) la exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas”* y (3) exponer *“las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución”*.¹

¹ Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); en esta sentencia se recopilaban los criterios fijados y decantados hasta aquel momento por la jurisprudencia, reiterados en muchas decisiones posteriores de la Sala Plena. Entre otras, ver por ejemplo, las siguientes providencias: Sentencia C-874 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia C-371 de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño), Autos 033 y 128 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis), Sentencia C-980 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil), Auto 031 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Gutiérrez), Auto 267 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), Auto 091 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 112 de 2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez), Sentencia C-351 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo), Sentencia C-459 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), Sentencia C-942 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), Auto 070 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-243 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV Nilson Elías Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto), Sentencia C-333 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), Auto A71 de 2013 (MP Alexei Egor Julio Estrada), Sentencia C-304 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Auto 145 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos), Auto 324 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), Sentencia C-081 de 2014 (MP Nilson Elías Pinilla Pinilla; AV Nilson Elías Pinilla Pinilla y Alberto Rojas Ríos), Auto 527 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa), Sentencia C-088 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), Sentencia C-206 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo, SV Alberto Rojas Ríos), Sentencia C-351 de 2017 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo), Sentencia C-359 de 2017 (MP José Antonio Cepeda Amarís, SV Iván Humberto Escrucera Mayolo), Sentencia C-389 de 2017 (MP Cristina Pardo Schlesinger), Sentencia C-542 de 2017 (MP Iván

El aparte normativo, “4.2 Parques y plazas públicas.”, del numeral 4.2 del Lit. A del Art. 4 del Decreto 0044 del 17 de enero de 2024, viola la constitución política, específicamente su Art. 16. Dicha transgresión del derecho constitucional imposibilita materialmente una faceta elemental para cada persona y por lo tanto lesiona el núcleo esencial del derecho constitucional, como lo veremos *in extenso* más adelante.

Sobre el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad.

El sistema de protección de derechos internacional, al igual que el regional, así como la Carta de Derechos, encuentran sustento en la noción de dignidad humana². El concepto central que soporta al sistema interamericano de derechos humanos y protege a todas las personas el goce efectivo de sus derechos es el de dignidad humana.³ Desde una perspectiva teleológica, los sistemas de protección crean un conjunto de garantías institucionales y judiciales, encaminadas a garantizar a las personas vivir en dignidad. Las guías internacionales sobre derechos humanos y política de drogas, también reconocen la dignidad humana como el principal principio fundacional de derechos humanos, a partir del cual construir ese terreno común. Por eso sostienen que ‘ninguna ley, política o práctica sobre drogas puede tener el efecto de socavar o violar la dignidad de cualquier persona o grupo de personas’.⁴ La facultad de una persona de tomar sus decisiones de manera libre y según su propia conciencia es, junto con la dignidad humana, uno de los principios más importantes del constitucionalismo moderno humanista. Sólo un ordenamiento jurídico que garantice a la persona la facultad de desarrollarse libre y autónomamente puede ser tenido como un régimen verdaderamente democrático.

El derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene origen en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Adaptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948), que en su artículo 22 consagra:

"Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad" (negritas no originales).

El artículo 16 de la Constitución Política establece:

"Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico".

El artículo 16 de la Constitución Política de Colombia introduce por primera vez en nuestro régimen constitucional el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El artículo parte del principio material según el cual se debe respetar el criterio de la persona sobre la mejor manera de vivir de acuerdo con el sentido de la propia dignidad, pero sin causar daño a otros o irrespetar el ordenamiento jurídico.

La persona tiene la facultad constitucional de tomar, sin interferencias, cualquier tipo de decisión que sea determinante en cómo se desenvuelve su vida. El concepto de autonomía de la personalidad comprende toda decisión que incida en la evolución de la persona en las etapas de la vida en las cuales tiene elementos de juicio suficientes para tomarla. La escogencia de

+57 320-514-6627



LEXETLIT.COM
CONTACTO@LEXETLIT.COM



CARRERA 32 # 7B SUR - 52
OFICINA 113
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

Humberto Escrucería Mayolo), Sentencia C-645 de 2017 (MP Diana Fajardo Rivera), C-688 de 2017 (MP Carlos Bernal Pulido, SV José Fernando Reyes Cuartas). En las anteriores providencias se citan y emplean los criterios recogidos en la Sentencia C-1052 de 2001 para resolver los asuntos tratados en cada uno de aquellos procesos.

² Colombia es un estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana (Art. 1, CP).

³ El carácter fundacional de la dignidad como concepto estructural del estado social y democrático de derecho de 1991 en Colombia, quedó claro desde el inicio de la jurisprudencia en sentencias como la T-401 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-406 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón; AV José Gregorio Hernández Galindo)

⁴ UNAIDS, WHO, UNDP, International Centre on Human Rights and Drug Policy (2019) *International Guidelines on Human Rights and Drug Policy*. I. Foundational Human Rights Principles, 1. Human Dignity.

estudios, la integración de una familia, las inclinaciones religiosas, políticas, culturales, sexuales, familiares y profesionales, son parte del desarrollo de la personalidad; como son procesos que la determinan, es la persona la única que tiene el derecho a decidir.⁵

Acertaba entonces la honorable Corte Constitucional⁶ cuando citaba a Pizzorusso: *"esta garantía [se refiere al libre desarrollo de la personalidad] se concreta en el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales que han de encabezarse con la "libertad personal" a la que se refiere el artículo 13 constitucional y que se contraponen a aquellos otros reconocibles a la libertad de opinión, por suponer un compendio de "libertades negativas" dirigidas a impedir interferencias en la esfera individual por parte de la autoridad, sobre todo, aunque también eventualmente por parte de los particulares"*⁷.

Por otra parte, el libre desarrollo de la personalidad tiene una connotación positiva y otra negativa. El aspecto positivo de este derecho consiste en que el hombre puede en principio hacer todo lo que desee en su vida y con su vida. Y el aspecto negativo consiste en que la sociedad civil y el Estado no pueden realizar intromisiones indebidas en la vida del titular de este derecho más allá de un límite razonable que en todo caso preserve su núcleo esencial.⁸

El derecho al libre desarrollo de la personalidad también es conocido como derecho a la autonomía personal. Es un derecho de carácter "genérico y omnicomprensivo"⁹ cuya finalidad es comprender aquellos aspectos de la autodeterminación del individuo, no garantizados en forma especial por otros derechos, de tal manera que la persona goce de una protección constitucional para tomar, sin intromisiones ni presiones, las decisiones que estime importantes en su propia vida.

El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es un simple derecho, es un principio que irradia a todos los derechos contenidos en la Constitución, pues otorga mayor fuerza a su contenido. Debe ser por tanto considerado como principio por cuanto es orientador, integrador y crítico de las normas constitucionales.¹⁰ Dicho status del derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad, arraigado en la dignidad humana, vino a fundar la jurisprudencia e interpretación constitucional desde la constitución del 91 y especialmente desde la Sentencia C-221 de 1994, en la cual se crearon marcos interpretativos de base para el análisis y la ponderación de las limitaciones que puede o no imponer el estado a sus ciudadanos. La Corte en su momento indicó que *"el legislador no puede válidamente establecer más limitaciones que aquellas que estén en armonía con el espíritu de la Constitución"*; *"Téngase en cuenta que en esa norma se consagra la libertad 'in nuce', porque cualquier tipo de libertad se reduce finalmente a ella. Es el reconocimiento de la persona como autónoma en tanto que digna (artículo 1o. de la C.P.), es decir, un fin en sí misma y no un medio para un fin, con capacidad plena de decidir sobre sus propios actos y, ante todo, sobre su propio destino. La primera consecuencia que se deriva de la autonomía, consiste en que es la propia persona (y no nadie por ella) quien debe darle sentido a su existencia y, en armonía con él, un rumbo."*¹¹

⁵ Sentencia C-253/19 Corte Constitucional

⁶ Sentencia C-253/19 Corte Constitucional

⁷ PIZZORUSSO, Alessandro. Lecciones de Derecho Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1.984, pág. 197.

⁸ ⁸ Sentencia C-253/19 Corte Constitucional

⁹ CEPEDA, Manuel José. Los derechos fundamentales en la Constitución de 1.991. Editorial Temis. Santa Fe de Bogotá. 1.992, pág. 146.

¹⁰ ¹⁰ Sentencia C-253/19 Corte Constitucional

¹¹ "El considerar a la persona como autónoma tiene sus consecuencias inevitables e inexorables, y la primera y más importante de todas consiste en que los asuntos que sólo a la persona atañen, sólo por ella deben ser decididos. Decidir por ella es arrebatárle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen. || Una vez que se ha optado por la libertad, no se la puede temer. En un hermoso libro "El miedo a la libertad", subraya Erich Fromm como un signo del hombre moderno (a partir de la Reforma) el profundo temor del individuo a ejercer su propia libertad y a que los demás ejerzan las suyas. Es el pánico a asumirse como persona, a decidir y a hacerse cargo de sus

En 2012, la Corte Constitucional reiteró que el derecho al libre desarrollo de la personalidad incluye la protección del porte y consumo de la dosis personal. *“Tal decisión del sujeto, que puede no compartirse y el Estado legítimamente desestimularla, ha de respetarse profundamente, cuando no impacte los derechos de los demás, en tanto es una de las dimensiones de la dignidad de la persona en una de sus dimensiones más fundamentales: ser autónomo y libre”.*¹²

En este punto, la jurisprudencia constitucional y ordinaria había alcanzado consensos importantes acerca de la no punibilidad del porte y/o consumo de sustancias psicoactivas, pero también se había llegado a un consenso en cuanto la posibilidad de las autoridades de hacer remisiones a centro de salud, recuperación o drogadicción. Dichas medidas habían sido ya consideradas por el legislador anteriormente, e incluso desde la Ley 30 de 1986 se propuso que dicha remisión fuera aun en contra de la voluntad del adicto, sin embargo, la alta corporación ha venido también fijando criterios de interpretación normativa que dejaban claro que dichas medidas solo podrían materializarse con la aprobación del supuesto adicto y nunca en contra de su voluntad, partiendo desde la línea trazada por la Sentencia C-252 de 2003.¹³

Así pues, existe un derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad que contempla la tenencia, porte y consumo de dosis personales de sustancias psicoactivas en el espacio íntimo de la vida de toda persona y en el espacio público como extensión del mismo derecho. La cuestión ha sido, por tanto, establecer los límites razonables y proporcionados que pueden ser impuestos a este derecho, al igual que a otras dimensiones del libre desarrollo de la personalidad.¹⁴

propias decisiones, esto es, a ser responsable. Por eso se busca el amparo de la colectividad, en cualquiera de sus modalidades: del partido, si soy un militante político, porque las decisiones que allí se toman no son mías sino del partido; de la iglesia, si soy un creyente de secta, porque allí se me indica qué debo creer y se me libera entonces de esa enorme carga de decidirlo yo mismo; del gremio, porque detrás de la solidaridad gremial se escamotea mi responsabilidad personal, y así en todos los demás casos. || Cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona, lo que ha decidido, ni más ni menos, es constatar el ámbito que le corresponde como sujeto ético: dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia. Si la persona resuelve, por ejemplo, dedicar su vida a la gratificación hedonista, no injerir en esa decisión mientras esa forma de vida, en concreto, no en abstracto, no se traduzca en daño para otro. Podemos no compartir ese ideal de vida, puede no compartirlo el gobernante, pero eso no lo hace ilegítimo. Son las consecuencias que se siguen de asumir la libertad como principio rector dentro de una sociedad que, por ese camino, se propone alcanzar la justicia. || Reconocer y garantizar el libre desarrollo de la personalidad, pero fijándole como límites el capricho del legislador, es un truco ilusorio para negar lo que se afirma. Equivale a esto: ‘Usted es libre para elegir, pero sólo para elegir lo bueno y qué es lo bueno, se lo dice el Estado’.” Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 1994 (MP Carlos Gaviria Díaz, SV José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa)

¹² Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV Nilson Pinilla Pinilla; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En este caso se resolvió declarar “EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 376 de la Ley 599 de 2000, tal como fue modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, en el entendido de que no incluye la penalización del porte o conservación de dosis, exclusivamente destinada al consumo personal, de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética, a las que se refiere el precepto acusado.”

¹³ “Desde distintos ángulos, la Corte ha analizado de manera particular el contenido y efectos de este Acto Legislativo, especialmente en tres providencias, la C-574 de 2011 (M. P. Juan Carlos Henao Pérez), C-882 de 2011 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y la antes citada C-491 de 2012 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva). En la primera de estas sentencias, la Corte realizó un profundo análisis, en particular sobre el inciso 6° del artículo 49 superior así modificado, aplicando para ello distintos métodos de interpretación. A partir de este ejercicio, la Corte concluyó que si bien la parte inicial de la norma pareciera tener un carácter imperativo, en realidad esto no resulta exacto, por cuanto las medidas y tratamientos administrativos que al respecto prevé la misma norma constitucional, solo pueden aplicarse previo el consentimiento informado del interesado. La citada sentencia C-491 de 2012 ratificó estas conclusiones, y expresamente señaló que la expedición de este acto legislativo no trajo consigo un cambio en el parámetro constitucional aplicable al porte de drogas en cantidades definidas como dosis personal.

¹⁴ Sentencia C-253/19 Corte Constitucional

+57 320-514-6627



LEXETLIT.COM
CONTACTO@LEXETLIT.COM



CARRERA 32 # 7B SUR - 52
OFICINA 113
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

Sobre los límites al libre desarrollo de la personalidad.

El derecho a la autonomía personal, al igual que los demás derechos consagrados en la Carta, no es absoluto. Esta idea la contiene el artículo 16 al consagrar : "...sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico". Estas dos limitaciones no pueden desconocer el núcleo esencial que es el mínimo vital de este derecho, siguiendo a Häberle, se denomina "contenido esencial" al ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho fundamental no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas".¹⁵

Una lectura del texto conduce a afirmar que la solución a los conflictos que se presenten entre el libre desarrollo de la personalidad y otros derechos, deberá solucionarse en cada caso concreto con un criterio razonable que concluya en la protección de ambos derechos.

Como ya lo ha sostenido la Corte Constitucional, en Sentencia de la Sala Segunda de Revisión:

"Para que una limitación al derecho individual al libre desarrollo de la personalidad sea legítima, y, por lo mismo no arbitraria, se requiere que goce de un fundamento jurídico constitucional. No basta que el derecho de otras personas o la facultad de la autoridad se basen en normas jurídicas válidas, sino que en la necesaria valoración ponderativa se respete la jerarquía constitucional del derecho fundamental mencionado. En consecuencia simples invocaciones del interés general, de los deberes sociales (CP art. 15), o de los derechos ajenos de rango legal, no son suficientes para limitar el alcance de este derecho".¹⁶

Sobre el derecho y el fuero interno de las personas.

Adicionalmente, será fundamental que el operador judicial que conoce del presente escrito de medio de control por inconstitucionalidad tenga en consideración el alcance del derecho como herramienta de control social de la conducta humana. Para el caso sea pertinente citar jurisprudencia de la honorable corte de cierre en el ámbito constitucional al despenalizar el consumo en el año 1994.

"Sobre la naturaleza del derecho, lo que caracteriza a esa forma específica de control de la conducta humana es el tener como objeto de regulación el comportamiento interferido, esto es, las acciones de una persona en la medida en que injieren en la órbita de acción de otra u otras, se entrecruzan con ella, la interfieren. Mientras esto no ocurra, es la norma moral la que evalúa la conducta del sujeto actuante (incluyendo la conducta omisiva dentro de la categoría genérica de la acción). Por eso se dice, con toda propiedad, que mientras el derecho es ad alterum, la moral es ab agentis o, de otro modo, que mientras la norma jurídica es bilateral, la moral es unilateral. En lenguaje hohfeldiano, puede afirmarse que el precepto del derecho crea siempre una situación desventajosa correlativa a una situación ventajosa. En el caso concreto, cuyo análisis importa, un deber correlativo a un derecho. La moral no conoce esta modalidad reguladora. Las obligaciones que ella impone no crean en favor de nadie la facultad de exigir la conducta debida. En eso radica su unilateralidad. No en el hecho de que no imponga deberes frente a otro, sino en la circunstancia que no confiere a éste facultad de exigir.

De allí que no haya dificultad alguna en admitir la existencia de deberes morales frente a uno mismo y menos aún cuando la moral que se profesa se halla adherida a una concepción teológica según la cual Dios es el dueño de nuestra vida, y el deber de conservarla (deber frente a uno mismo) se resuelve en un deber frente a Dios.

Pero otra cosa sucede en el campo del derecho: cuando el legislador regula mi conducta con prescindencia del otro, está transponiendo fronteras que ontológicamente le están vedadas. En otros términos: el legislador puede prescribirme la forma en que debo comportarme con otros, pero no la forma en que debo comportarme conmigo mismo, en la medida en que mi conducta no interfiere con la órbita de acción de nadie. Si de hecho lo hace, su prescripción sólo puede interpretarse de una de estas tres maneras: 1) expresa un deseo sin connotaciones normativas; 2) se asume dueño absoluto de la conducta de cada persona, aún en los aspectos que nada tienen

+57 320-514-6627

LEXETLIT.COM
CONTACTO@LEXETLIT.COM

CARRERA 32 # 7B SUR - 52
OFICINA 113
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

¹⁵ HÄBERLE, Peter. El contenido esencial como garantía de los Derechos Fundamentales.

¹⁶ Cfr, Sentencia N° T-3007 de la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional.

*que ver con la conducta ajena; 3) toma en cuenta la situación de otras personas a quienes la conducta del sujeto destinatario puede afectar.*¹⁷

Así que, proseguiremos con la sustentación actual del concepto de violación y los cargos por inconstitucionalidad partiendo de este norte fijado por la citada alta corporación. El poder judicial, como expresión material de la facultad reguladora del derecho, solo puede interferir en la conducta humana exteriorizada materialmente y/o que cause efectos que resulten lesivos para terceros. Así es como, en sana lógica interpretativa y excelencia hermenéutica, la alta corporación distingue entre el derecho y la moral, fijando fronteras insuperables para el legislador cuando este pretende regular de manera directa o indirecta como el ciudadano debe pensar y actuar cuando dichos actos solo le afectan a sí mismo. Resulta que el fuero interno de cada persona y la forma en la cual cada una decide cómo sobrellevar la existencia es irrelevante para el soberano, en tanto que la legitimidad del poder público que lo cobija en los modernos estados sociales de derecho no le alcanza para pretender sancionar los comportamientos o pensamientos que no tengan efectos materiales en el mundo fenoménico con terceros. Como lo veremos también más adelante el estado puede dictar como me comporte con los demás, pero no como me comporte conmigo mismo.

Sobre las más recientes consideraciones de la jurisprudencia constitucional.

El asunto que nos convoca ha sido anteriormente considerado por la honorable Corte Constitucional. Pero más allá de considerar la legalidad de la dosis mínima, cuya protección constitucional se ha visto amplificada con la creación constitucional del concepto de dosis de aprovisionamiento¹⁸, la Corte Constitucional, con ocasión de la expedición del Decreto 1844 de 2018, ha fijado posiciones de interpretación, razonabilidad y ponderación acerca del derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad y el cuidado y la integridad del espacio público, la llamada tranquilidad pública y los derechos de niños, niñas y adolescentes a un ambiente sano¹⁹. Durante la construcción de la demanda de inconstitucionalidad que dio lugar a la Sentencia C-253 de 2019, los demandantes identificaron que, en aquella ocasión, como en esta, los derechos en tensión eran la convivencia, tranquilidad, ambiente y salud pública y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por una parte, con los derechos a la libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad por otra²⁰. Nótese que las similitudes entre los supuestos fácticos de ambos casos son más que llamativos. En el caso de la Corte Constitucional los magistrados abordaban estos cuestionamientos desde el enjuiciamiento a unas normas que contenían restricciones generales y permanentes al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público, mientras que en el caso que actualmente nos convoca el fallador también es presentado con un cuestionamiento de pertenencia constitucional de un aparte de un acto administrativo que también resulta, en la práctica, en una restricción permanente y general al consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público de uso más variado y polifacético, las plazas y parque públicos. La solución a esta tensión de derechos que trae consigo el acto administrativo expedido por la entidad pública de carácter territorial demandada es la restricción general y permanente del consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público de plazas y parques públicos. Mientras que lo cierto es que la restricción en todo el espacio público de plazas y parques, sin ningún tipo de matiz o condicionamiento, representa una limitación irrazonable pues hay distintos usos del espacio público, especial plazas y parques, donde tal actitud que representa la expresión de una idea y es una forma de participación política que no afecta derecho de terceros ni la integridad del mismo. Al respecto y como se infiere del aparte normativo demandado, en el

+57 320-514-6627



LEXETLIT.COM
CONTACTO@LEXETLIT.COM



CARRERA 32 # 7B SUR - 52
OFICINA 113
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

¹⁷ Sentencia C-221 de 1994 Corte Constitucional

¹⁸ CSJ SP9916-2017, 11 jul. Rad. 44997

¹⁹ Sentencia C-253/19 Corte Constitucional

²⁰ Sentencia C-253/19 Corte Constitucional

presente caso la entidad pública demandada para suplir dicha necesidad, acudió a la restricción absoluta del consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público de plazas y parques, sin crear ningún matiz o excepción, generando, como lo hemos afirmado, una intervención grave de los derechos a la libertad de expresión y libre desarrollo de la personalidad.

La reglas creadas por los apartes del acto administrativo demandado no son necesarias para alcanzar los fines propuestos por la Ley 1801 de 2016, (Seguridad, Tranquilidad, Ambiente y Salud Pública Art. 6; [asegurar] la vida social armónica, pacífica y respetuosa Art. 5 entre las personas con los animales, las personas con el ambiente y las personas con el espacio público, bajo un enfoque preventivo y con el objetivo principal de la convivencia Art. 7.”, puesto que puede optarse por otros medios menos lesivos del libre desarrollo de la personalidad, que también permitan alcanzar los fines imperiosos, algunos de los cuales ya existen. La medida no sólo no es necesaria, sino que en muchos casos ni siquiera es adecuada para alcanzar la finalidad que se propone alcanzar. El impacto que tienen la regla que crea el aparte del acto administrativo acusado sobre el libre desarrollo de la personalidad y sobre el principio de libertad es realmente significativo. La norma enjuiciada crea en sentido práctico una restricción general y amplia que se aplica, en cualquier caso, independientemente de las condiciones de tiempo y modo, y en espacios públicos pensados para el disfrute de todos los ciudadanos. Al respecto es del caso citar la honorable Corte Constitucional nuevamente:

“El medio elegido por el Legislador en este caso, de forma similar al anterior, es establecer legalmente una prohibición amplia y genérica del comportamiento en cuestión (consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas) en el espacio público en general, y en especial en parques, so pena de la imposición de medidas correctivas de policía. Para la Sala es claro que en este caso el Legislador también empleó un medio que no se encuentra excluido de la democracia, a primera vista (prima facie). Como se dijo, establecer una prohibición general de carácter policivo, sometida a medidas correctivas, no es un medio que por principio esté excluido del orden jurídico vigente. Por el contrario, establecer normas de policía, en ejercicio del poder de policía, valga la redundancia, es una facultad de regulación con raigambre constitucional que busca generar las condiciones propicias para asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales. Al igual que ocurría con la regla analizada previamente, el Legislador optó en el presente caso por usar una medida que supone la inversión del principio de libertad, pues se prohíbe de forma amplia y general la conducta en cuestión (consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas), pero se acepta que existirán excepciones en los casos en que tal comportamiento sea autorizado. Se insiste en que este tipo de normas no se encuentran excluidas por definición del orden constitucional vigente, pero están sometidas a un escrutinio estricto por parte del juez constitucional. Esta regla tampoco desconoce el límite constitucional de no imponer obligaciones para con uno mismo, pues se justifica en la afectación al cuidado y la integridad del espacio público, en los derechos de los demás. Así, es claro que el Artículo 140 del Código Nacional de Policía y Convivencia, al establecer una prohibición general y amplia de policía, sometida a medidas correctivas, no está empleando un medio excluido del orden jurídico, que nunca pueda ser empleado por el legislador, como es el caso de la tortura.”²¹

Como vemos la Corte en su sabiduría ha mantenido una línea estricta acerca de la razonabilidad de las prohibiciones amplias y genéricas debido al alto impacto que generan en derechos como el libre desarrollo de la personalidad. Adicionalmente, desde el inicio de la jurisprudencia la Corte ha advertido la necesidad de hacer un juicio de constitucionalidad estricto para establecer la razonabilidad de una medida legal que afecte el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía individual.²²

+57 320-514-6627



LEXETLIT.COM
CONTACTO@LEXETLIT.COM



CARRERA 32 # 7B SUR - 52
OFICINA 113
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

²¹ Sentencia C-253/19 Corte Constitucional

²² Corte Constitucional, Sentencia C-309 de 1997 (MP Alejandro Martínez Caballero; AV Vladimiro Naranjo Mesa, Hernando Herrera Vergara); en la que se analiza la razonabilidad de imponer el uso del cinturón de seguridad como restricción al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía individual, mediante un juicio ‘estricto’.

La presente acción presenta principalmente un cargo concreto de constitucionalidad en los siguientes términos: (i) restricción irrazonable a la libre opción de elegir los planes de vida.

Sobre la restricción irrazonable a la libre opción de elegir los planes de vida.

El aparte normativo enjuiciado establece prohibiciones permanentes y generales en parques plazas públicas a conductas cuya realización, per se, no constituyen ninguna afectación -lesividad- a un bien jurídicamente tutelado en tanto que el consumo de cualquiera de estos productos no afecta ni la tranquilidad de las personas y mucho menos la integridad del espacio público". El consumo de sustancias psicoactivas, en horas y lugares ajenos a niños, niñas y adolescentes, permanecen en la órbita personal de los consumidores y no trascienden a la esfera de las demás personas, no era necesario intervenir por medio de las formulaciones demandadas, salvo que existiera una afectación de la integridad de las personas que concurran al espacio público. Para tal efecto, la legislación ya cuenta con otras herramientas, pues ya existen reproches que pretenden evitar la afectación al espacio público y sus componentes (Art. 51), los atentados a la integridad personal por medio de riñas (Art. 93) o desafíos a la autoridad (Art. 35). Por tanto, es claro que se está violando un mínimo constitucional que reconoce la autonomía y libre desarrollo de la personalidad. En este marco interpretativo de respeto a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, toda intervención sobre la conducta que realice el legislador sobre decisiones que sólo afectan al ciudadano, supone una transgresión del derecho que nos asiste de ser legisladores de nuestro propio destino, siempre y cuando no afectemos derechos de otros. Es ese y no otro, el norte interpretativo del artículo 16 de la Constitución Nacional y en consecuencia, los apartes de norma demandados suponen una intervención desproporcionada en la órbita del individuo. Adicionalmente, volviendo a la jurisprudencia constitucional nacional, de acuerdo con lo decidido por la Corte en la sentencia C-221 de 1994, establecer conductas penales o contravencionales que no afectan derechos de los demás *"constituye una violación del libre desarrollo de la personalidad [...] en la medida que impide que los ciudadanos desplieguen y desarrollen su personalidad de acuerdo a sus preferencias culturales, éticas y políticas."*

Así mismo, como quedó sentado en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica (Fecundación *in vitro*), *"(...) el caso se ha concentrado en el impacto generado por una interferencia desproporcionada en decisiones sobre la vida privada, familiar y los demás derechos involucrados, y el impacto que tuvo dicha interferencia en la integridad psicológica (...)"*²³

Se insiste en que la intervención punitiva es irrazonable y desproporcionada en este caso, porque ya existen normas que contemplan comportamientos contrarios a la convivencia, para controlar eventuales, no necesarias, consecuencias que puede producir el consumo de sustancias psicoactivas. Para proteger la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas y además, el cuidado e integridad del espacio público, ya existe una formulación normativa que interviene cuando en realidad se despliega un comportamiento violento que supera la órbita personal.

De acuerdo a los apartes de norma enjuiciados la regla legal acusada de inconstitucional podría resumirse en los siguientes términos:

- No deben consumirse sustancias psicoactivas en parques o plazas públicas, por ser comportamientos contrarios al cuidado e integridad del mismo.
- Hacerlo dará lugar a (i) multa tipo 2 o 4, (ii) destrucción del bien, (iii) tener que participar en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia y (iv) remisión a los Centros de Atención en Drogadicción (CAD) y Servicios de Farmacodependencia (Ley 1566 de 2012).

²³ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Artavia Murillo y otros ("fecundación *in vitro*") vs. costa rica. Sentencia de 28 de noviembre de 2012 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas).

Esta resulta ser en sentido práctico y sencillo la misma regla que creaba de manera general el Decreto 1844 de 2018, con la diferencia radicando en que tratándose de la norma que nos convoca actualmente se ha determinado con mayor especificidad los sitios del espacio público en la cuales aplica y el perímetro alrededor de estos cubiertos por la misma restricción. Lo cierto es que las restricciones y sanciones de las que echa mano la entidad pública demandada si bien buscan un fin legítimo, emplean un medio restrictivo en casos en los que no existe una afectación a ningún derecho, para evitar eventuales daños colaterales de la práctica del consumo. A este problema de idoneidad se sumaría uno segundo de necesidad, pues se añade que los problemas que legítimamente se pretenden enfrentar, se pueden prevenir y controlar por otros medios legales que son menos lesivos para el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, y que de hecho ya existen. Es importante que se advierta que estas reglas se refieren a personas mayores de 18 años. Para los niños y las niñas, esto es, toda aquella persona menor de 18 años, las reglas aplicables son diferentes. El primer Capítulo del Título V, dedicado a las relaciones respetuosas con grupos específicos de la sociedad, se ocupa precisamente de las niñas, los niños y las adolescentes. El Artículo 38 del Código Nacional de Policía y Convivencia, por ejemplo, incluye dentro de los comportamientos que afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes y que, por lo tanto “no deben realizarse”: (numeral 5°): “Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o alquilar, cualquiera de los siguientes elementos, sustancias o bebidas, a niños, niñas o adolescentes:” (literal b): “Bebidas alcohólicas, cigarrillo, tabaco y sus derivados, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud”. La norma precisa, que su incumplimiento da lugar a medidas correctivas, pero sin perjuicio de lo establecido por la normatividad vigente sobre la materia y de la responsabilidad penal a que haya lugar.²⁴ A esto se suman otra medida de Policía que se ocupa de proteger el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en entornos educativos.²⁵ Adicionalmente, cualquier persona cuya conciencia esté en estado de ‘grave alteración’ por consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, por su protección y la de los terceros, podrá ser ‘trasladada’ (Artículo 155). En este evento, no obstante, el Código advierte que, si un traslado se da por alteración del estado de conciencia, porque la persona se encuentra bajo el efecto del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o

²⁴ Código Nacional de Policía y Convivencia. “Artículo 39.- *Prohibiciones a niños, niñas y adolescentes*. Además de los comportamientos prohibidos en el presente Código y en las normas vigentes, se prohíbe a niños, niñas y adolescentes: 1. Comercializar, distribuir, tener, almacenar, portar o consumir sustancias psicoactivas o tóxicas, alcohólicas o demás sustancias estimulantes que puedan afectar su salud o que produzcan dependencia, que estén restringidas para menores de edad. || PARÁGRAFO 1o. A quien incurra en el comportamiento antes señalado se le aplicará la siguiente medida correctiva: Para los menores de 16 años, amonestación; para los mayores de 16 años, participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. || PARÁGRAFO 2o. El niño, niña o adolescente que incurra en el comportamiento antes descrito será objeto de protección y restablecimiento de sus derechos de conformidad con la ley. || PARÁGRAFO 3o. Las administraciones municipales o distritales determinarán los sitios adecuados a los que se podrán trasladar los niños, niñas y adolescentes que incurran en el comportamiento señalado en el presente artículo, para su protección e imposición de la medida correctiva correspondiente”.

²⁵ Código Nacional de Policía y Convivencia. “Artículo 34. COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RELACIONADOS CON CONSUMO DE SUSTANCIAS. Los siguientes comportamientos afectan la convivencia en los establecimientos educativos y por lo tanto no deben efectuarse: 1. Consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas, dentro de la institución o centro educativo. || 2. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expendir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas dentro de la institución o centro educativo. || 3. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de conformidad con el perímetro establecido en el artículo 84 de la presente ley. || 4. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expendir bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas en el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la presente ley. || 5. Destruir, averiar o deteriorar bienes dentro del área circundante de la institución o centro educativo. || PARÁGRAFO 1o. Los niños, niñas y adolescentes que cometan alguno de los comportamientos señalados en los numerales anteriores serán objeto de las medidas dispuestas en la Ley 1098 de 2006 y demás normas vigentes en la materia. || También procederá la medida de destrucción del bien, cuando haya lugar. [...]”.

tóxicas “no podrá ser trasladada por el simple hecho de estar consumiendo, sino que deben existir motivos fundados y el agente de Policía con fundamento en el principio de proporcionalidad determinará si existen las razones objetivas previstas en este Código.”²⁶ Sumado a todo lo anterior, el código contempla medidas de policía especiales para el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas en lugares habilitados para aglomeraciones (Artículo 49) y en actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas (Artículo 59) o aglomeraciones de público complejas (Artículo 74). También existen disposiciones que se ocupan de regular competencias especiales de los gobernadores y los alcaldes, ante situaciones de emergencia o calamidad, dentro de las cuales se contempla ‘restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas’ (Artículo 202). Todo esto para concluir que aparte de las medidas de policía estudiadas en el presente proceso, existen otras medidas, también de Policía, orientadas a lidiar con el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. Pero como si no bastara con las herramientas jurídicas citadas, hay medidas penales y disciplinarias que funcionan con sus lógicas y reglas propias, también orientadas a controlar acciones relacionadas con el consumo de sustancias que sean contrarias a los derechos de los demás y de la sociedad. La regla que crean los apartes del acto administrativo acusado en el presente proceso, por tanto, *no es la única norma que regula la cuestión, no es la que se ocupa de regular los casos de personas menores de edad ni de lugares tales como los entornos educativos.*²⁷

Ahora bien, aunque a la luz de la ley las medidas correctivas de policía que se imponen a las personas no pueden entenderse como castigos, es claro que tienen un impacto considerable sobre los derechos de las personas. La multa es aproximadamente la tercera parte de un salario mínimo legal vigente. La remisión a los programas sociales o a los programas de atención en salud supone una interferencia significativa en los derechos, libertades y autonomía de un ser humano. En especial, cuando de estas se deja constancia en un registro que es de carácter nacional y al cual tienen acceso todas las personas, porque es público. De hecho, el propio Código Nacional de Policía y Convivencia, como se indicó, establece como uno de los principios aplicables a sus normas, la necesidad, esto es, que las medidas de policía deben usarse cuando sea ‘rigurosamente necesario’.

La regla legal de prohibición amplia y general además de constituir un medio que no es necesario, en muchas ocasiones ni siquiera es idóneo. En efecto, en aquellos casos en los que el consumo de sustancias psicoactivas no representa siquiera una amenaza a la tranquilidad y a las relaciones respetuosas, la prohibición de ese comportamiento no es un medio adecuado para garantizar estas finalidades. En tal sentido, también se suman los problemas que, a causa de la vaguedad y ambigüedad de la norma, por su grado de indeterminación ya previamente analizada, que generan problemas de aplicación de la misma y, consecuentemente, comprometen la eficacia de la disposición y la posibilidad de alcanzar las finalidades propuestas.²⁸

Deviene entonces como evidente en este punto de la sustentación del concepto de violación, que no es razonable constitucionalmente imponer una prohibición amplia y genérica al consumo de sustancias psicoactivas en plazas y parques públicos cuando no es un medio necesario y, en muchas ocasiones, ni siquiera idóneo, para alcanzar fines, así sean imperiosos (como lo son ‘la tranquilidad o las relaciones respetuosas’, elementos estructurales de la convivencia social pacífica y armónica).

+57 320-514-6627



LEXETLIT.COM
CONTACTO@LEXETLIT.COM



CARRERA 32 # 7B SUR - 52
OFICINA 113
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

²⁶ Sentencia C-253/19 Corte Constitucional

²⁷ Sentencia C-253/19 Corte Constitucional

²⁸ Sentencia C-253/19 Corte Constitucional

Sobre este caso en particular.

Sea entonces del caso especificar que para el caso que nos convoca, el alcalde municipal de El Medellín, Antioquia pretende, a través de medios policivos, regular la conducta de habitantes y visitantes de este territorio de manera extensiva, impidiendo el consumo de sustancias psicoactivas en plazas y parques públicos de manera general y permanente. Aunque abordaremos las consecuencias materiales de la prohibición general que comprenden los apartes normativos acusados, es necesario sentar que el juicio de constitucionalidad propuesto parte de la base de que los efectos de la aplicación de dichos apartes demandados resultan desproporcionados y exagerados, al incluir estos espacios como plazas y parques, lugares de espacio públicos donde se desarrollan importantes facetas de la vida de los ciudadanos y que, además, en sentido práctico y aplicación material resultaría en la exclusión de quienes consuman sustancias psicoactivas en cualquier espacio público aun cuando este consumo no interfiera en el disfrute de los derechos de terceros del espacio público. Aunque, para el caso de consumo de sustancias psicoactivas en espacio público, resulte razonable la regulación por parte del estado, sin embargo, deviene como desproporcionada una prohibición general como la propuesta por la entidad pública demandada. Para el demandante, una regulación del consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público no puede incluir de manera general y permanente prohibiciones en plazas y parques públicos; las prohibiciones permanentes serían solamente constitucionales en espacios públicos como escenarios deportivos, centros de formación y educación, pero no así tratándose de espacios públicos como plazas, parques y similares los cuales por su naturaleza y destinación son del disfrute de la generalidad de ciudadanos. Precisamente allí radica, fácticamente para este caso, la distinción jurídica de beneficiarios y destinatarios de los apartes de norma enjuiciados. Porque, si bien el Decreto 0044 de 2024 pretende la protección de un grupo de especial protección constitucional como niños, niñas y adolescentes, lo cierto es que los derechos de estos, aunque prevalentes, no pueden resultar nugatorios para los derechos de los demás ciudadanos. En este caso, la protección extendida que pretende la norma acusada de inconstitucionalidad, al restringir el consumo de sustancias psicoactivas en todos los parques y plazas públicas de manera permanente, las veinticuatro (24) horas de los siete (7) días de la semana, resulta desproporcionada porque en efectos prácticos anula completamente el derecho constitucional de consumidores funcionales a su libre desarrollo de la personalidad, de acuerdo a como lo hemos venido sustentando con jurisprudencia del tribunal constitucional de cierre y autores de la doctrina. Es que la importancia de los parques y plazas públicas es de mayor significancia para el presente caso, puesto que en estos espacios se desarrollan y desenlazan momentos y aspectos fundamentales de las vidas de las personas. Amigos, romances, política y simple apreciación tranquila de la existencia tienen lugar allí; excluir completamente a un grupo de personas mediante restricciones generales y permanentes crea una situación de desmejora y desventaja que no puede ser soportada por un estado social de derecho.

También es de importancia resaltarle al juzgado de conocimiento de la presente causa, que la restricción al consumo es permanente, todo el tiempo, y general, en todas los parques y plazas públicas; pues si bien existen otros espacios públicos, la mayoría de espacios dispuestos para el esparcimiento humano en una ciudad son parques y plazas públicas. En la práctica la regulación crea una restricción general que en un sentido práctico anula completamente cualquier posible disfrute de estos espacios por parte de personas que ejerzan allí el consumo de sustancias psicoactivas como parte de su derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad.

De manera evidentemente voluntaria el acto administrativo aplica las restricciones de manera permanente a la totalidad de espacios públicos como parques y plazas del municipio, claramente significando que el consumo de sustancia psicoactivas se encuentra restringido en



+57 320-514-6627



LEXETLIT.COM
CONTACTO@LEXETLIT.COM



CARRERA 32 # 7B SUR - 52
OFICINA 113
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

la totalidad de espacios públicos para el esparcimiento de los ciudadanos en el territorio. Es esta, y no otra, la finalidad de la omnicomprendensiva inclusión de parques y plazas públicas, aplicar una restricción permanente, veinticuatro (24) horas de los siete (7) días de la semana. No hay condición de tiempo alguna. El comportamiento puede estarse realizando a la una de la mañana o a la una de la tarde, da igual. Tampoco hay condiciones de modo. No importa la cantidad. No se prohíbe el consumo en exceso o el consumo abusivo. Pueden ser sustancias psicoactivas legales o ilegales, naturales o sintéticas, duras o blandas. No importan las cantidades ni el posible efecto. En sentido estricto, puede ser caféina, teína o taurina; cualquier droga psiquiátrica; una bocanada de marihuana o cinco *porros* completos; un cuarto de pastilla de éxtasis o tres pastillas completas; puede ser heroína o cristal de metanfetamina. Todo se regula igual.²⁹

Resulta entonces en este punto imperativo que analicemos el elemento de proporcionalidad, porque si bien es cierto los apartes demandados crean una situación de restricción, prohibición y castigo desproporcionada, tiene también sentido que nos preguntemos cuál sería entonces una aproximación proporcional a la riña o tensión de derechos que mencionamos anteriormente. La pregunta es si la restricción con el fin y la necesidad asignada a las autoridades públicas es constitucionalmente aceptable, teniendo en cuenta su ámbito de aplicación. El demandante considera que en el caso objeto de estudio, es evidente que se puede proteger en el espacio público y el derecho de las demás personas que concurren en el espacio público sin una intervención grave, esto es, restricción total, de los derechos a la libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad y acceso al espacio, al crear la prohibición total del consumo de sustancias psicoactivas en parques y plazas públicas. Lo cierto es que la entidad pública demandada pudo establecer horarios, zonas, días o divisiones, pero sin embargo decidió expedir un decreto con restricciones generales, completas e ineludibles que le impiden a los consumidores funcionales ejercer su derecho constitucional al libre desarrollo de su personalidad en estos vitales componentes del espacio público como parque y plazas públicas.

El medio elegido por el alcalde del Distrito de Medellín, si bien busca fines imperiosos y no está prohibido, no sólo no es necesario, sino que ni siquiera es adecuado, no es idóneo para alcanzar los fines de cuidado e integridad del espacio público. La medida, por tanto, no es idónea para lograr esos fines. La conducta de consumir sustancias psicoactivas no genera por sí sola (*per se*), la afectación física o material de dichos espacios, afectación al derecho de niños, niñas y adolescentes y/o la tranquilidad o relaciones respetuosas. Se vislumbra como palmario entonces que el acto administrativo acusado parcialmente contempla una prohibición amplia y genérica del consumo de sustancias psicoactivas que es irrazonable y desproporcionada constitucionalmente por las razones anteriormente expuestas. Si bien la entidad pública demandada busca finalidades imperiosas constitucionales, a través de un medio que no está prohibido, sí es un medio que impone restricciones al libre desarrollo de la personalidad que no son necesarias, o bien porque en esos casos no hay riesgo que evitar o porque en esos casos se puede contar con otro tipo de medidas, muchas de las cuales ya existen. Se protegen ciertos valores constitucionales plenamente, a la vez que se limita en exceso e innecesariamente el libre desarrollo de la personalidad.

Pruebas.

La presente pretensión se constituye como de pleno derecho, pudiendo el honorable operador judicial prescindir de la etapa probatoria.

+57 320-514-6627

LEXETLIT.COM
CONTACTO@LEXETLIT.COM

CARRERA 32 # 7B SUR - 52
OFICINA 113
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

²⁹ Sentencia C-253/19 Corte Constitucional

Competencia.

Es Usted Señor Juez competente para conocer del presente proceso de acuerdo al Art. 155, Núm. 1º de ley 1437 de 2001, por el lugar de expedición del acto; y según el Art. 194 de Ley 1437 de 2011 por el tipo de acto y proceso.

Así mismo por carecer de CUANTÍA, según Art. 157 de Ley 1437 de 2001, toda vez que se trata de un proceso contencioso administrativo de simple nulidad.

Procedimiento.

A la presente demanda debe dársele el trámite del proceso contencioso administrativo regulado en los artículos 194, subsiguientes y concordantes de ley 1437 de 2011, Código Administrativo y de lo contencioso administrativo.

Anexos.

Me permito anexar:

1. Decreto 0044 del 17 de enero de 2024, expedido por el señor FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA, alcalde del Distrito de Medellín, Antioquia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 166 Núm. 1º de Ley 1437 de 2011.

Notificaciones.

El demandado.

DISTRITO DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA

Dirección: Calle 44 # 52 - 165, Centro Administrativo La Alpujarra, Medellín, Colombia

Tel. 604 4444144

Correo Electrónico: notimedellin.oralidad@medellin.gov.co

El suscrito en la secretaria de su despacho o en la Carrera 32 No 7 B Sur – 52. Intr. 113. Medellín, Antioquia.

Celular: 3205146627

Correo Electrónico: gr@lexetlit.com

Del Señor Juez,

GUILLERMO RESTREPO MAYA

C.C. N. 1.017.133.290 de Medellín.

T.P. N. 226.135 del Consejo Superior de la Judicatura

+57 320-514-6627



LEXETLIT.COM
CONTACTO@LEXETLIT.COM



CARRERA 32 # 7B SUR - 52
OFICINA 113
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

**Alcaldía de Medellín**Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación**DECRETO 0044 DE 2024
(ENERO 17)**

“Por medio del cual se establecen las zonas y perímetros en el Distrito de Medellín, tanto en su área rural como urbana, en lugares concurridos por niños, niñas y adolescentes; en los que se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal, de conformidad con lo preceptuado por la Ley 1801 de 2016, modificada por la Ley 2000 de 2019”

EL ALCALDE DE MEDELLÍN

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 209 y los numerales 1, 2 y 3 del artículo 315 de la Constitución Política; el artículo 84 y el literal b, numeral 1 del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el parágrafo 3 del artículo 34 y los artículos 198, numeral 3, 204 de la Ley 1801 de 2016 y demás normas complementarias vigentes, y

CONSIDERANDO QUE

La Convención sobre los Derechos de los Niños y la Convención Americana de los Derechos Humanos reconocen que los niños son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social.

En virtud de la vinculatoriedad a las convenciones antes aludidas, los Estados firmantes tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos todos los derechos reconocidos en estos instrumentos, es por ello que en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, dispone que las autoridades de todo orden, deben adoptar las medidas que se estimen necesarias para “(...) asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.

Así mismo, obliga a que los Estados parte, aseguren “(...) que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,

www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740

**Alcaldía de Medellín**Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”.

Por su parte, el artículo 2 de la Constitución Política dispone como fines del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia establece la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, prohibiendo toda forma de violencia en contra de estos sujetos que se consideran de especial protección constitucional.

El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la desconcentración y la delegación de funciones.

El artículo 315 de la Constitución Política de Colombia dispone que alcalde es la primera autoridad de policía del respectivo ente territorial, siendo atribución de este cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.

El artículo 84 de la Ley 136 de 1994, establece que en cada municipio o distrito habrá un alcalde quien ejercerá la autoridad política, será jefe de la administración local y representante legal de la entidad territorial, asimismo, es la primera autoridad de policía del municipio o distrito.

El artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, modifica el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y trae consigo las funciones que debe ejercer el alcalde, entre las que



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

cabe resaltar que deberá servir como agente del Presidente en el mantenimiento del orden público y actuar como jefes de policía para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana.

De acuerdo con el artículo 204 de la Ley 1801 de 2016, el alcalde es la primera autoridad de policía del distrito o municipio y como tal le corresponde garantizar la convivencia y la seguridad en su jurisdicción. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.

El artículo 2 de la Ley 1801 de 2016 dispone como objeto del Código de Policía y Convivencia Ciudadana, entre otros, propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público; definir comportamientos, medidas, medios y procedimientos de policía; establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, inmediato, expedito y eficaz para la atención oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional.

El artículo 34 de la Ley 1801 de 2016 define los comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias y en el párrafo tercero, dispone que corresponderá a los alcaldes establecer los perímetros de los establecimientos educativos para la restricción del consumo de sustancias psicoactivas.

El artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, define los comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público y, especialmente, se prohíbe: "7. Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente; "13. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al interior de centros deportivos, y en parques. "14. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas del espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés público, que sean definidas por el alcalde del municipio. La delimitación de estas áreas o zonas debe obedecer a principios de razonabilidad y proporcionalidad".

**Alcaldía de Medellín**Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

En la sentencia C-127 de 2023, la Corte Constitucional dispuso, en relación con el artículo 140, numeral 13 y 14 de la Ley 1801 de 2016, declarar exequible la expresión “portar” en el entendido de que esta restricción no se aplica cuando se trata del porte con fines de consumo propio o de dosis medicada. Adicionalmente, en relación con el artículo 140, numeral 13, declaró exequibles las expresiones “consumo”, “sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal”, y en “parques” en el entendido de que la restricción aplica, además de la protección del espacio público, en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y conforme a la regulación que expidan las autoridades que ejercen poder de policía en todos los niveles, en el ámbito de sus competencias, con base en los principios *pro infans*, de proporcionalidad, razonabilidad y autonomía territorial, en los términos de la presente providencia”.

En relación con el artículo 140, numeral 14 de la Ley 1801 de 2016, decidió también declarar exequibles las expresiones “consumir”, “sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal”, “en áreas o zonas del espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés público, que sean definidas por el alcalde del municipio. La delimitación de estas áreas o zonas debe obedecer a principios de razonabilidad y proporcionalidad”, en el entendido de que la restricción aplica, además, en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y conforme a la regulación que expidan las autoridades que ejercen poder de policía en todos los niveles, en el ámbito de sus competencias, con base en los principios *pro infans*, de proporcionalidad, razonabilidad y autonomía territorial, en los términos de la presente providencia”.

El artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 dispone como consecuencias a las faltas previstas las siguientes: para el caso del numeral 7, Multa General tipo 2; Destrucción de bien. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia y remisión a los Centros de Atención en Drogadicción (CAD) y Servicios de Farmacodependencia a que se refiere la Ley 1566 de 2012. Para el caso de los numerales 13 y 14, Multa General tipo 4; Destrucción del bien.



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Por otra parte, en lo que tiene que ver con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, la Corte Constitucional ha reiterado que el derecho al libre desarrollo de la personalidad incluye la protección del porte y consumo de la dosis personal. Tal decisión del sujeto, que puede no compartirse y el Estado legítimamente desestimularla, ha de respetarse profundamente, cuando no impacte los derechos de los demás, en tanto es una de las dimensiones de la dignidad de la persona en una de sus dimensiones más fundamentales: ser autónomo y libre. También, la misma Corte Constitucional ha dejado claro que cuando el porte recae sobre sustancia estupefaciente sicotrópica o droga sintética, en cantidades comprendidas incluso dentro de la categoría de dosis personal, pero destinadas no al propio consumo sino a la comercialización, tráfico, e incluso a la distribución gratuita, la conducta será penalizada toda vez que tiene la potencialidad de afectar, entre otros bienes jurídicos, el de la salud pública (Sentencia C-253 de 2019, entre otras).

En enero de 2024, el Ministerio de Justicia y del Derecho publicó el Protocolo para la aplicación de los numerales 13 y 14 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, en el que dispuso lineamientos y recomendaciones para la regulación por parte de los entes territoriales, de las restricciones que podrían aplicarse para el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público, en procura de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El artículo 25 de la Ley 1801 de 2016 establece que quienes incurran en comportamientos contrarios a la convivencia, serán objeto de medidas correctivas de conformidad con esta ley, sin perjuicio de las demás acciones que en derecho correspondan.

El artículo 172 de la Ley 1801 de 2016 define las medidas correctivas, como acciones impuestas por las autoridades de Policía a toda persona que incurra en comportamientos contrarios a la convivencia o el incumplimiento de los deberes específicos de convivencia. Las medidas correctivas tienen por objeto disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia.

El párrafo 1 del artículo 172 de la Ley 1801 de 2016 precisa que las medidas correctivas no tienen carácter sancionatorio; por tal razón, deberán aplicarse al comportamiento contrario a la convivencia las medidas correctivas



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO1717740



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y demás normas que regulen la materia.

El artículo 17 del Código de Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.

La Ley 1098 de 2006 en su artículo 32 establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de reunión y asociación con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de cualquier otra índole, sin más limitación que las que imponen la ley, las buenas costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del menor.

El consumo de sustancias psicoactivas en los establecimientos educativos, parques y plazas, centros recreativos y deportivos, constituye un factor de riesgo para que los niños, niñas y adolescentes, sean víctimas de acciones o conductas que causen daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, o, incluso, cualquier hecho punible.

Se han definido zonas del espacio público que, por sus características especiales, facilitan la concurrencia de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, además de los establecimientos educativos y su perímetro cercano, se establece que los parques y plazas, los escenarios deportivos y recreativos, facilitan la integración y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, por lo que se hace necesario restringir el consumo de sustancias psicoactivas en estos lugares públicos.

Aunque se reconoce que el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas debe ser abordado desde una perspectiva de salud pública, también se reconoce que la Corte Constitucional, en sentencia C-127 de 2023, dispuso una garantía de protección especial a niños, niñas y adolescentes, lo que implica que, en procura de dicha garantía, desde la alcaldía deben fijarse restricciones al consumo en ciertos lugares públicos, solo con el ánimo de salvaguardar los intereses de este grupo poblacional que goza de especial protección.



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Así las cosas, las medidas correctivas deben obedecer a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que es deber de la autoridad competente verificar la posible afectación de los niños, niñas y adolescentes como condicionante de la aplicación de la medida correctiva. De este modo, no se trata de una prohibición absoluta para el consumo de sustancias psicoactivas en ciertos lugares públicos; pues, con base en criterios de necesidad se determinaron espacios donde concurren niños, niñas y adolescentes, quienes son el objeto de protección del presente decreto.

El uso de sustancias psicoactivas produce graves consecuencias en la salud de los niños, niñas y adolescentes, por lo que se hace necesario adoptar medidas encaminadas a la protección de este grupo poblacional, para buscar así la garantía de sus derechos, los cuales prevalecen sobre los de los demás. Bajo este entendido y en virtud del marco constitucional y legal expuesto, es preciso establecer el perímetro del espacio público de uso cotidiano de niñas, niños y adolescentes, en el que se restringirá el consumo de sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal, en pro de contribuir al disfrute de sus derechos, en desarrollo de lo previsto en la Ley 1801 de 2016, modificada por la Ley 2000 de 2019.

El segundo estudio periódico de salud mental del adolescente y consumo de sustancias psicoactivas (2019)¹, presentó un panorama preocupante sobre la situación del consumo de sustancias psicoactivas entre menores de edad de la ciudad, así: En comparación con estudios previos, se encontró una tendencia al incremento de la prevalencia de consumo de sustancias ilegales y legales. El consumo de sustancias psicoactivas ilegales presentó los siguientes datos: Marihuana 11,4%, popper 6,9%, cocaína 4,0%, inhalables 3,1%, hongos y rohypnol 2,4%, éxtasis 2,2%; cacao sabanero 1,5%, basuco 0,9% y heroína con 0,7%. Aunque ésta última es la menos consumida, la presencia del consumo de esta sustancia entre jóvenes de la ciudad representa una seria amenaza para la salud pública por su inmenso poder adictivo y sus nefastos efectos sociales y biológicos.

Con relación al consumo de drogas ilícitas, el 3,2% de los jóvenes presenta adicción y el 11,9% se catalogan en riesgo de sufrirla. Por primera vez se

¹ Informe sobre consumo de sustancias psicoactivas. Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín. Secretaría de Salud.

**Alcaldía de Medellín**Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

incluyó el juego patológico y se encontró una prevalencia de 13.8% y una enorme cantidad (37,8%) están en riesgo de padecerlo, lo cual es preocupante y señala la necesidad de iniciar programas de prevención.

Entre los factores asociados a la presencia de trastornos mentales y/o consumo de sustancia psicoactiva entre jóvenes escolarizados, se observa una tendencia de reporte de maltrato verbal, físico y sexual, contra niños y niñas; El maltrato verbal pasa de 21.2% a 25.8%, el físico de 6.8% a 8.9% y el sexual de 1.2% a 1.7%. En lo que tiene que ver con la activación de código dorado por sustancias psicoactivas (emergencia en salud mental), durante el año 2023 se realizaron 319 activaciones derivadas de la intoxicación o abstinencia por consumo de sustancias psicoactivas.

Por las anteriores consideraciones, el Alcalde del Distrito de Medellín,

DECRETA

Artículo 1. Objeto. Establecer las zonas y perímetros, tanto en el área rural como urbana del Distrito de Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en lugares concurridos por niños, niñas y adolescentes; en los que se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal, de conformidad con lo preceptuado por la Ley 1801 de 2016, modificada por la Ley 2000 de 2019.

Artículo 2. Definiciones.

2.1. Espacio público. Según lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley 1801 de 2016, es el "conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y de especial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas las personas en el territorio nacional".

2.2. Parque. Como lo ha reconocido la Corte Constitucional, los parques son "escenarios de encuentro y de convivencia colectiva, en los que se construye sociedad". En el caso de los NNA, los parques serían aquellos escenarios destinados para que, "mediante distintas actividades, como el juego y el

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

www.medellin.gov.co

**Alcaldía de Medellín**Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

deporte, contribuyen activamente a su desarrollo físico, personal, social, afectivo y psicomotor". (Sentencia C 127 de 2023). Estos espacios suelen contar con mobiliario destinado para el juego y esparcimiento como juegos, areneras, canchas deportivas, entre otros. También, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial de Medellín (Acuerdo n° 48 de 2014, Art. 69), el parque es un espacio público al aire libre destinado a la recreación, contemplación y contacto con la naturaleza, así como a la recreación pasiva y activa. En este espacio abierto predominan los valores paisajísticos, naturales y la presencia de vegetación, que en su conjunto prestan servicios ambientales fundamentales para la ciudad. Hacen parte de esta categoría los Ecoparques y Parques Recreativos.

2.3. Plaza. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial de Medellín (Acuerdo n° 48 de 2014, Art. 69), es un lugar público resultante de la agrupación de edificios en torno a un espacio libre; es el espacio público de mayor representatividad bien sea por sus características singulares de localización, por su peso en la conformación de la estructura del desarrollo territorial o por los valores culturales que contiene o representa. Integran esta subcategoría las tipologías de plazuela y plazoleta.

2.4. Equipamiento o centro deportivo y recreativo: De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Medellín (Acuerdo n° 48 de 2014, Art. 102) y para efectos de este Decreto, esta categoría comprende las áreas cuyo carácter principal es la recreación pasiva, activa o mixta. Están conformados por uno o varios escenarios deportivos y recreativos con el respectivo amoblamiento y espacios complementarios.

2.5. Sustancia psicoactiva. Para efectos de la aplicación de este decreto se tendrán en cuenta las sustancias psicoactivas contempladas en el artículo 2.2.8.9.1 del Decreto 1070 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 1844 de 2018, y las definidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Salud, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 4° del artículo 34 de la Ley 1801, adicionado por el artículo 2 de la Ley 2000 de 2019. Igualmente, las que figuran en la listas I y II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y su Protocolo de Modificación, celebrada en Ginebra el 25 de marzo de 1972, aprobada por medio de la Ley 13 del 29 de noviembre de 1974; que se encuentren incorporadas en las listas I, II, III y IV del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias sicotrópicas, aprobado por medio de

www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

la Ley 43 del 29 de diciembre de 1980; o cualquier otra sustancia que se encuentre legalmente prohibida, y las definidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de salud.

Artículo 3. *Ámbito de Aplicación.* El presente Decreto rige para las personas naturales, en la jurisdicción de todo el Distrito de Medellín, tanto en su área rural como urbana.

Artículo 4. *Zonas y Perímetros de Restricción.* Se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal, en las zonas y perímetros que se señalan a continuación de:

a) Zonas de Restricción

4.1. Instituciones o establecimientos educativos, tanto públicos como privados.

4.2. Parques y plazas públicas.

4.3. Centros deportivos y recreativos

4.4. En aquellos lugares del espacio público que se encuentren por fuera de las restricciones anteriores, donde se realicen eventos públicos o privados y concurren niños, niñas y adolescentes, mientras dure el evento.

b) Perímetro de Restricción

Se establece un perímetro de cien (100) metros lineales en el área circundante a las instituciones o establecimientos educativos, tanto públicos como privados, en los cuales se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal.

Parágrafo 1. El perímetro se medirá a partir de los linderos laterales, de fondo y frontales del lote donde se ubique la institución o establecimiento educativo, hasta los linderos más próximos: laterales, de fondo y frontales, donde se ubiquen las actividades objeto de restricción.

Artículo 5. *Medidas Correctivas.* La persona que incurra en los comportamientos descritos en la Ley y en los artículos anteriores, de



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

conformidad con el artículo 34 y el artículo 140 numerales 7, 13 y 14 de la Ley 1801 de 2016, será objeto de aplicación de las medidas correctivas establecidas para cada caso. Para el caso del numeral 7, Multa General tipo 2; Destrucción de bien. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia y remisión a los Centros de Atención en Drogadicción (CAD) y Servicios de Farmacodependencia a que se refiere la Ley 1566 de 2012. Para el caso de los numerales 13 y 14, Multa General tipo 4; Destrucción del bien.

Parágrafo 1. Si el infractor se tratare de una persona menor de edad, además de lo establecido en la Ley 1801 de 2016 para el caso, se procederá también de conformidad con lo establecido en la Ley 1098 de 2006, en atención a la garantía y restablecimiento de sus derechos.

Artículo 6. Información. Toda persona que considere que se encuentra afectada por el consumo de sustancias psicoactivas o que tenga conocimiento que un niño, niña o adolescente pueda verse afectada por el mismo hecho, podrá recibir y solicitar información sobre la oferta institucional que la Alcaldía de Medellín establece para tales efectos, para lo cual, podrá acercarse a la Secretaría de Salud.

Artículo 7. Control. Con el fin de salvaguardar la seguridad y convivencia ciudadana y en procura de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la Policía Metropolitana del Vallé de Aburrá, en coordinación y articulación la Alcaldía de Medellín y sus dependencias, realizará intervenciones permanentes y continuos en los sitios previamente indicados, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

Artículo 8. Intervención en casos de presencia efectiva de niños, niñas y adolescentes como criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Con el fin de propender por la aplicación de medidas preventivas o pedagógicas antes que sancionatorias, así como por el reconocimiento del enfoque de salud pública que también orienta este Decreto, la imposición de medidas correctivas se priorizarán en aquellos casos en los que se verifique la presencia efectiva de niños, niñas y adolescentes en las zonas donde se restringe el consumo de sustancias psicoactivas. La aplicación de las medidas correctivas deben obedecer a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

**Alcaldía de Medellín**Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Artículo 9. Vigencia y derogatoria. El presente Decreto rige a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito de Medellín y deroga el Decreto 0465 de 2021.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA**

Alcalde de Medellín

LUIS GUILLERMO PATIÑO ARISTIZABAL
Secretario de Educación
NATALIA LÓPEZ DELGADO
Secretaria de Salud
MANUEL VILLA MEJÍA
Secretario de Seguridad y Convivencia

Proyectó:

Jose Luis Correa Lopez
Abogado Contratista

Revisó y aprobó:

GR Pablo Ruiz Garzón
Sub secretario Operativo de la Seguridadwww.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

